

No. 98-01

1998

**LA CONCEPCIÓN APRIORÍSTICA DEL DESARROLLO ECONÓMICO:
LECCIONES PARA COLOMBIA**

Humberto Franco González

Alfonso Gómez Cifuentes

Documentos de trabajo

Economía y Finanzas

Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (CIEF)



**UNIVERSIDAD
EAFIT**
Abierta al mundo

LA CONCEPCIÓN APRIORÍSTICA DEL DESARROLLO ECONÓMICO: LECCIONES PARA COLOMBIA

SÍNTESIS. Analizar la evolución de las ideas y de las políticas para el desarrollo socioeconómico que las acompañan, ha sido tarea de mucho tiempo atrás pero, no obstante tal situación, los cambios que constantemente experimentan las economías obligan a retomar estas sendas dado que los mencionados cambios, no obedecen de manera exclusiva al comportamiento aislado de las variables económicas sino que también ellos se han visto altamente influenciados por las tendencias ideológicas y políticas peculiares de aquellos agentes encargados de sugerir, diseñar y ejecutar las acciones encaminadas a la consecución del objetivo terminal del desarrollo: el mejoramiento de la calidad de vida de toda la sociedad sin distingo de raza, sexo, cultura, religión, estrato, región, gremio, partido, sector, etc.

Lo debatible del asunto no es que la alternativa seguida haya sido una u otra; el cuestionamiento surge del grado de apego que en un momento determinado se ha tenido por cierta tendencia ideológica desconociéndose, por lo tanto, las posibles implicaciones negativas que de ella se puedan desprender y cerrando inexorablemente las puertas a otras opciones que de igual manera pudieran ser consideradas para el logro del tan anhelado y loable propósito del desarrollo.

INTRODUCCIÓN

No cabe la menor duda de que muchas de las afirmaciones que se hagan en favor o en contra de la intervención gubernamental, en aras de contribuir al progreso económico de los países, se han vuelto sabiduría convencional y que tal sabiduría ha venido cambiando en el transcurso del último medio siglo. En efecto culminada la segunda contienda bélica a nivel mundial, la modalidad en materia de intervención estatal que caracterizó sobre todo a muchos de los países europeos fue la planeación económica central y la propiedad gubernamental de numerosas empresas al tiempo que, de manera paradójica, Estados Unidos se constituía en el líder que abanderaba las políticas que se inclinaban por la reducción de las barreras al comercio internacional que previamente se habían implementado con motivo de la crisis económica mundial de finales de los años veinte y principios de la década de los treinta.

Por su parte, la panacea en materia de modelos de desarrollo económico para los países más pobres del orbe la constituía la conducción gubernamental de los procesos de producción a través de la propiedad, en gran medida, de los recursos de producción y la protección a ultranza de las economías mediante la adopción de barreras al comercio internacional tanto de índole administrativo como arancelario a tal punto que el ente estatal se constituía en factor protagónico de las actividades de producción.

En tal sentido, no es nada nuevo el reiterar una vez más, que para los liberales ortodoxos la eliminación de los modelos de desarrollo basados en la sustitución de importaciones conducidos por el Estado es condición necesaria, y hasta suficiente, para que el crecimiento

económico se logre de una manera más ágil y sostenida. Pero también sería reiterativo el manifestar que existen quienes argumentan, por ejemplo, que el éxito de los países del sudeste asiático en las tres décadas anteriores, obedeció en gran medida a la conducción inteligente por parte del Estado de las estrategias para el desarrollo económico.

Como se puede notar de manera clara, las opiniones en torno al como, cuando y en cual o cuales sectores debe interferir el Estado para alterar en un determinado rumbo el funcionamiento de las economías, todavía distan mucho de alcanzar un consenso, razón por la cual al mismo tiempo en que en uno o varios países se diseñan y ejecutan políticas económicas de liberación de los mercados en otro u otros, es el Estado el agente orientador de los procesos de producción y de las estrategias para el desarrollo económico y social de sus regiones. Son estos los lineamientos que permiten el que una vez más la controversia en lo relacionado con la acción del Estado en las economías retorne al escenario académico, político y social en el mundo contemporáneo.

Quizás el problema que gira en torno a la temática de la intervención o no del Estado en la economía, radica en el hecho de que no se tienen argumentos lo suficientemente contundentes a cerca de lo que se entiende por el concepto de la libertad económica y por la forma de su medición; el concepto de libertad económica no puede ser concebido solo a través de la determinación del tamaño del gasto público, o con la magnitud de la propiedad estatal de la industria, o simplemente con el nivel de las barreras al comercio internacional: es la combinación de estos y muchos otros factores, la que deja un amplio margen para engrandecer la controversia en torno a la diversidad de los elementos en consideración.

En tal sentido el artículo presente tiene la intención no solo de brindar una posible luz al respecto, sino también de confrontar con la realidad colombiana, desde la posguerra, los resultados de la acción del Estado en la actividad productiva nacional de tal manera que se pueda concluir a cerca de la viabilidad o no de su continuidad como agente que determina los destinos económicos y sociales del país.

Para la consecución de los objetivos trazados en el presente trabajo, además de recordar algunos elementos de corte teórico en lo relacionado con los postulados que abogan por la libertad de los mercados o por la acción del Estado en ellos, se establecen una serie interrogantes, para el caso colombiano, cuya solución se constituye en aportes que de una u otra forma invitan a la reflexión acerca de la conveniencia de persistir con un modelo de desarrollo basado exclusivamente en la libre acción del mercado como única alternativa en los procesos de desarrollo de los países (así en Colombia en el último cuatrienio se le haya establecido un control al acelerado ritmo con el que se emprendió en su momento el modelo aperturista), al tiempo que permiten identificar la estrecha relación existente entre las posiciones en materia de desarrollo desde el punto de vista de las estrategias económicas y las tendencias o inclinaciones de índole político que, a su turno, han sido asumidas en concordancia con la concepción ideológica de los orientadores de los destinos socioeconómicos de una nación.

Con estas orientaciones el artículo ha sido fragmentado en cinco apartados que permitirán identificar tanto la coherencia existente entre las tendencias teóricas del desarrollo y su resultado empírico, como las bondades o fallas de las diversas estrategias que caracterizan a

un determinado esquema de desarrollo tomando como caso particular, el colombiano. En síntesis se tratará de demostrar que la mayoría de los diseñadores y ejecutores de las políticas y estrategias para el desarrollo social y económico de los países, se ven altamente influenciados en sus acciones por las corrientes y tendencias ideológicas del momento además de la determinante incidencia que en dichas acciones tiene la concepción que apriori se haya formado sobre un problema en particular de una región.

LA ADOPCIÓN DEL NEOLIBERALISMO EN COLOMBIA: SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO QUE LO IMPULSÓ.

Con base en los planteamientos teóricos del paradigma Neoliberal pregonado por las instituciones de financiamiento multilateral externo (FMI y BM) y teniendo en cuenta, además, el supuesto agotamiento que ya venía padeciendo el modelo sustitutivo de importaciones en nuestro país, se puso en marcha una serie de estrategias encaminadas a recuperar la senda del crecimiento económico colombiano que se había transitado entre las décadas de los años cincuenta y setenta y que, lamentablemente, se había perdido en el decenio de los ochenta, en el que el crecimiento promedio apenas si había alcanzado la magra cifra del 3.4% que no fue peor, por la leve recuperación que se tuvo en la segunda mitad del decenio ya que en el primer lustro del mismo, el crecimiento promedio de la economía colombiana apenas si alcanzó el 2.6% promedio anual.

Para muchos analistas, el excesivo proteccionismo que caracterizó a la economía nacional durante el periodo en el que tuvo vigencia el modelo sustitutivo cuya característica fundamental fue su alto nivel de selectividad, deprimió de forma considerable los niveles de ahorro e inversión motores del crecimiento económico y, en consecuencia, llevó a una desaceleración de la actividad productiva en el país a tal punto que el nivel de vida se estancó y en muchas zonas del país se deterioró. No se consideran, en este caso, los argumentos expuestos por otros expertos que atribuyen gran parte del citado descalabro económico a factores de índole exógeno característicos de una economía altamente dependiente como la colombiana; en esa dirección, señalan, que en el resultado negativo de la economía del país primaron causales tales como el reflejo de la segunda crisis petrolera mundial, año 78, y los excesivos condicionamientos de los organismos multilaterales internacionales como contraprestación de la negociación de la deuda externa de la región.

Por su parte, el éxito que en el momento presentaban las economías del este asiático y, a nivel regional, la economía chilena, se constituía en otro argumento a favor para considerar seriamente la posibilidad de dar un viraje a la política económica de largo plazo que se traía y adoptar un nuevo modelo de desarrollo basado en la “confianza” que inspira el mercado, partiendo de un equilibrio macroeconómico que permitiera tanto la posibilidad de su consolidación en el mercado nacional, como su proyección hacia el mercado exterior.

LAS ESTRATEGIAS DE LA REVOLUCIÓN PACÍFICA

Ante el panorama anteriormente descrito, en el plan de desarrollo “La Revolución Pacífica” se planteó como objetivo fundamental la dinamización del crecimiento económico y paralelamente la necesidad de combatir la pobreza característica de gran parte del pueblo

colombiano. En tal sentido las reformas que se implementaron tuvieron un carácter eminentemente estructural y se llevaron a cabo en mercados tales como el laboral, de capitales y el de bienes; además se pretendió dar vía libre a todo tipo de estrategias que contribuyeran al mejoramiento de la infraestructura física y social, a la explotación racional de los recursos naturales en aras de preservar el ecosistema, y a la incorporación de ciencia y tecnología en los diferentes procesos de producción.

Concretizando los elementos centrales del nuevo modelo que determinaría el horizonte del desarrollo económico nacional, se puede manifestar que el mismo se cimentó con reformas estructurales que buscarían flexibilizar los mercados laboral, cambiario, y financiero, la eliminación de barreras a la inversión externa, la creación de un sistema de pensiones de carácter privado que compitiera con el sistema estatal del ISS, la modernización de las instituciones y de las funciones del Estado, las concesiones para la realización de proyectos viales y de generación eléctrica y la privatización de puertos, ferrocarriles y demás monopolios estatales.

De igual manera el equilibrio macroeconómico se constituiría (y se constituye) en piedra angular para la consecución del tan anhelado objetivo de la inserción competitiva en el mercado mundial; con miras a su consecución, la reducción de la inflación sería la meta intermedia a lograr; las políticas económicas deberían apuntar entonces, al enfriamiento de la economía colombiana pues los excesivos gastos implicaban desajustes en los diferentes mercados que, por su puesto, se traducían en presiones crecientes sobre los diferentes niveles de precios.

De tales desajustes el que se debería enfrentar inmediatamente y con la mayor agresividad posible sería el déficit de las finanzas públicas: dada su gran magnitud y la necesidad de su financiación, no solo se había incurrido en constantes apreciaciones de la tasa de cambio a través de su financiación con créditos externos sino que también, había implicado el desalojo de los empresarios privados de la posibilidad de costear sus proyectos de inversión ante el encarecimiento del crédito, producto de la creciente demanda de fondos prestables de carácter doméstico realizada por el sector público para financiar sus constantes déficits presupuestarios.

Pues bien, con todo este bagaje de maravillosas intenciones, ideas, y posibles realizaciones, se emprendió el famoso programa de modernización de la economía colombiana; era la repetición, en alguna medida, de la estrategia de política económica que caracterizó al país y a la gran mayoría de las naciones latinoamericanas con miras a enfrentar la crisis de la deuda externa de la región en los años ochenta a través del seguimiento de una serie de “recomendaciones” del Fondo Monetario Internacional. En esas condiciones, el objetivo de la apertura fue entregado a un modelo teórico que probablemente poco tenía que ver con las características estructurales de la economía colombiana y con la idiosincrasia nacional.

LA DECADA PERDIDA EN COLOMBIA: AUNQUE LAS COMPARACIONES SEAN ODIOSAS.

Si se hiciera remembranza del acontecer productivo en los dos primeros años después de la liberación indiscriminada de las importaciones en la administración Turbay como estrategia

terminal a la ya larga política económica de carácter contraccionista iniciada en las postrimerías del gobierno de Pastrana y continuada en el de Alfonso López Michelsen, se corroboraría la apreciación planteada en el sentido de la tremenda desaceleración y posterior recesión de la economía del país, a tal punto que el deterioro del ingreso percapita fue sencillamente alarmante sin desconocer, bajo ningún punto de vista, que la situación coyuntural del periodo gubernamental de López, excesiva presión monetaria por el represamiento de reservas internacionales, implicó la adopción de políticas de corte restrictivo con el consabido resultado en materia económica.

En efecto, no obstante ser la economía colombiana la mejor librada de la región, por primera vez en muchos años la tasa de crecimiento del ingreso por habitante del país tuvo cifras negativas (-1.2% y -0.6% en 1982 y 1983) ante los resultados deprimentes de la actividad productiva nacional al alcanzar tasas de solo el 0.9% y 1.6% respectivamente, apesar del ritmo descendente que se presenciaba en la tasa de crecimiento poblacional para el periodo en cuestión, como de manera acertada lo manifiestan los seguidores de la ortodoxia Neoliberal.

Ante tal situación cabe preguntarse si el modelo sustitutivo de importaciones, seguidor de los postulados keynesianos, en alguna oportunidad se identificó porque dentro de su filosofía se planteara la estrategia de la liberación indiscriminada de importaciones, o la de las altas tasas de interés, política monetaria que caracterizó la administración López, o el aletargamiento de la aptitud estatal en materia de inversión física y social. La inquietud nace del simple hecho de que las anteriores estrategias de política económica no se desprenden, ni mucho menos, de las enseñanzas keynesiana, por el contrario, son acciones características del paradigma Neoliberal que ya invadía los cerebros de los tecnócratas colombianos que habían asimilado tales ideas en las universidades anglosajonas donde cursaron sus estudios de posgrado. Lo coincidente del caso es el hecho de ser precisamente los años de liberación comercial, inicios de la década de los ochenta, los de resultados más deprimentes de la economía colombiana en el mismo periodo.

Es posible manifestar entonces, que las estrategias de política económica que se evidencian en la historia económica nacional en la gran mayoría de los años de la década de los ochenta, son acciones que en muy poco se diferencian, de las políticas que en la materia plantea la ortodoxia Neoliberal, situación que permitiría aseverar que el descalabro económico que vivió el país durante el decenio referenciado es atribuible más a las políticas de liberación económica del periodo que a la misma intervención del Estado en la actividad productiva del país, que si bien aún el denominador común de la política económica de largo plazo era el de la sustitución cepalina de las importaciones, esas acciones de política coyuntural son asimilables al pregón Neoliberal del libre mercado como agente asignador de los recursos de producción y “distribuidor eficiente, como el que más”, de los beneficios del crecimiento económico.

Ahora bien, pero si de continuar contribuyendo al debate y a la controversia se trata, es pertinente conocer los puntos de vista de quienes en la actualidad consideran que ha sido el intervencionismo keynesiano el que ha desembocado en el deterioro económico y social del país. En la dirección anterior, es preciso hacer referencia a algunos trabajos que concluyen en señalar que la inflación y el déficit fiscal que han caracterizado a la economía

colombiana desde muchos años atrás como resultado de la intervención estatal en la misma, han obstaculizado el crecimiento económico del país en los últimos años y aunque Colombia no cayó en los extremos de otras naciones de la región, siempre ha existido algún grado de tolerancia con el desajuste de las finanzas públicas que ha frenado el ritmo de crecimiento y ha incidido negativamente sobre el aumento del ingreso percapita de los colombianos.

Desde esa perspectiva, el mecanismo represivo ha sido, según García (1994), la política monetaria que ha tenido que acentuarse ante la constante presencia de los mencionados desequilibrios fiscales que han tendido a elevar la inflación a través de la financiación de los citados desajustes tanto con el considerable aumento del nivel del endeudamiento externo como con la incursión estatal en el mercado financiero local, demandando recursos a través de los créditos primarios del Banco de la República o simplemente optando por los ahorros destinados a financiar los proyectos de inversión privados.

En momentos de mayor actualidad, aunque es una posición que viene desde años atrás, otros detractores colombianos de los postulados keynesianos, han argumentado posturas que van en la misma dirección de la anterior visión macroeconómica. En este caso por ejemplo Montenegro (1997) asevera que la sugerencia de un “respetable” grupo de economistas en torno a la necesidad de incrementar el déficit fiscal a través de un aumento del gasto público cuando las economías se encuentren en un estado recesivo no ha sido aplicable, bajo ningún punto de vista, a la economía colombiana en el pasado reciente, ni mucho menos en nuestros días.

Considera, al igual que todos los críticos del intervencionismo de Estado, que el alto nivel del gasto ha generado un menor crecimiento de la economía de tal forma que se puede visualizar claramente, la relación negativa existente entre gasto y crecimiento económico, ilustrando dicha situación para el caso colombiano con el siguiente argumento estadístico: en los primeros años de la década del ochenta cuando la característica internacional del momento para los países latinoamericanos era la del cierre del mercado de capitales (no así del mercado doméstico para los productos importados)¹ y cuando el déficit fiscal bordeaba el 8%, el crecimiento bajó a un nivel que estuvo por debajo del 2%. La recuperación de la economía solo se empieza a notar “contra todos los pronósticos de los economistas keynesianos “criollos” cuando el déficit comenzó a bajar mediante una reducción del gasto público como proporción del PIB del 27% en el año de 1983 al 24, 4% en 1990.

Culmina su apreciación en este sentido, señalando que si el gasto público indujera la reactivación económica, en 1996 se hubiera tenido una bonanza en lugar de una recesión ya que en el citado año el gasto público alcanzó un nivel del 37% y no obstante, la economía solo creció al 2,1%. Queda claro pues, que la posición de Montenegro, otrora director del Departamento Nacional de Planeación, administración Gaviria, es abiertamente anti-intervencionista y sus argumentos dejan entrever una inclinación tácita, altamente favorable hacia la mano milagrosa del mercado como ente determinante de la distribución de los recursos productivos y de la generación de los precios de equilibrio de las diferentes mercancías en la totalidad de los mercados.

¹ Anotación de los autores.

Pero ¿quién discute las anteriores aseveraciones ante la contundencia de las estadísticas presentadas para el efecto? ¿acaso la teoría económica podría desvirtuar tal realidad para el caso colombiano en los periodos referenciados? En este sentido el lector desprevenido no tendría la oportunidad de refutar tales expresiones, si así lo quisiera. ¿por qué entonces, no echar un vistazo atrás para tratar de comprender el porque tardamos tanto en cambiar las políticas de crecimiento en las que la acción del Estado fue tan perjudicial?

Curiosamente lo que no se menciona por ningún lado, es que en esos mismos años ochenta se adoptó la política de la famosa liberación de importaciones, a la que se hizo alusión con previa anterioridad en el presente artículo, coadyuvando a horadar tanto las ya maltrechas finanzas públicas como la posición desventajosa del empresario colombiano en relación con sus pares externos. ¿ O es que tal estrategia no torpedeó el desempeño económico del periodo mencionado? ¿ Cual de los dos factores fue el mayor determinante en el bajo nivel de la actividad económica en los ochenta, el excesivo gasto público o la liberación indiscriminada de las importaciones?

Ahora ¿ Por qué en lugar de manifestar tajantemente que ha sido el alto nivel del gasto público el que ha obstaculizado el ritmo de crecimiento económico, no se entra a reflexionar sobre la distribución sectorial del mismo y las posibles incidencias macroeconómicas de otras políticas económicas restrictivas que se adoptaron para enfrentar situaciones de orden coyuntural? ¿ Quien puede discutir las magnificas externalidades tanto económicas como sociales que se desprenden de las esferas de la inversión social y de la inversión física cuando éstas realmente se realizan? ¿ Por qué no se hace referencia a otros años en los que el notorio crecimiento del “gasto público” en materia social y en infraestructura física, coincidió con el repunte del producto nacional? Otra cosa es que los recursos sean desviados hacia el peculiar despilfarro burocrático que ha padecido el país a través de su historia: en tal caso el conflicto sería más de carácter judicial y en este sentido es preocupante la tremenda debilidad que identifica a la ley colombiana.

De manera lógica para los entendidos en la materia sería de esperarse, desde la óptica del último interrogante así no conocieran estadísticas, algún tipo de presión inflacionaria como el costo en el que se incurriría si el objetivo de las políticas fuera en primera instancia el del crecimiento económico. Es sabido por estos agentes que la consecución de los objetivos económicos no es gratuita, sobre todo, cuando los mismos no concuerdan por que distan en el tiempo. En efecto, mientras el objetivo del crecimiento y desarrollo económico es de mediano y largo plazo, las metas de reducción de la inflación son de corto plazo es decir se constituyen en resultados de orden coyuntural que es necesario lograr a toda costa por encima, inclusive, del mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores de una nación.

Se puede concluir entonces, que la respuesta a estos y muchos otros interrogantes que se puedan desprender del tema en cuestión trasciende, indefectiblemente, el campo económico para incursionar en el ámbito político, desde donde se puede incidir claramente sobre el comportamiento del ciclo productivo, sobre todo cuando se está ad portas de una nueva elección presidencial en el país.

EL NUEVO MODELO: TENUES RESULTADOS

No se trata, por supuesto, de entrar a terciar acerca de la benevolencia o no de la participación del Estado omnipotente en todos los asuntos económicos de un país, sobre todo cuando su acción se encuentra preñada de corrupción, clientelismo y burocracia política. Por el contrario la reflexión que se precisa en el momento debe girar en torno a la posibilidad de participación del Estado benefactor en los Asuntos económicos.

Es pertinente tener presente además, que en todas las tareas y/o actividades de la vida la “concepción apriorística” incorpora un alto nivel de sesgo tanto en las ideas que se manifiestan a la luz pública como en los mensajes, los hechos y las aptitudes que se pueden adoptar en un momento determinado. En esa perspectiva el lector, veedor u oidor de una situación en particular se podrá inclinar a favor o en contra de un planteamiento, de un punto de vista y, por que no, de una corriente política, ideológica y hasta religiosa, personificada en un conjunto de agentes a tal punto, que el excesivo fanatismo en el que podría caer lo engeguería y por muchas alternativas que se tuvieran para enfrentar una determinada situación con igual o mayor posibilidad de éxito, ni siquiera serían tenidas en cuenta a la hora de tomar una decisión.

Desde luego que ante la realidad descrita de manera tangencial, tanto los seguidores a ultranza de la “mano invisible” de Adam Smith, como los más radicales pregoneros de la intervención del Estado en los asuntos económicos, no han escapado al sesgo que implica la mencionada concepción apriorística, a tal punto que no solo la evidencia histórica sino también la realidad empírica, ha permitido comprobar crasos errores en las políticas adoptadas en aras de mejorar las condiciones de vida de un colectivo social, todo por la acérrima inclinación hacia una determinada ideología o planteamiento político, social o económico, porque lo que no puede ser ni siquiera imaginable, es que una determinada aptitud de un orientador o potencial administrador del país, se haya adoptado buscando un objetivo totalmente opuesto al del desarrollo económico y social.

Lo que si es evidente es el freno dado a los procesos de desarrollo al pretender obtener beneficios particulares por parte de quienes están en el poder: esta es, desafortunadamente, la cultura de la corrupción característica de los países de la región. A lo mejor se siga pecando de un alto grado de ingenuidad al presumir la honestidad de los individuos, hasta que no se les demuestre lo contrario, como lo manifiesta la ley.

Pues bien, ha transcurrido un periodo que pudiera considerarse prudencial y los logros sobre todo en materia social del modelo Neoliberal en el país dejan mucho que desear; tampoco es que lo alcanzado a nivel de las variables macroeconómicas sea de resaltar. Como lo señala Guzmán (1997) el diseño y ejecución del proceso de apertura en Colombia fue rápido y amplio arrinconando a la empresa nacional y limitándola a vender flores, café y otro tipo de productos que no podían competir con la producción extranjera caracterizada, esta última, por la gran participación tecnológica que incorpora en los procesos de producción, lesionando considerablemente a la gran mayoría de la producción industrial y agrícola del país, que tuvo como alternativa la de orientar sus inversiones al limitado mercado de los bienes no transables.

Pero la consecuencia más nefasta que se desprende del resultado anterior fue el considerable aumento del desempleo que se registró en las zonas rurales y urbanas del país para la población económicamente activa cuya posibilidad laboral se encuentra circunscrita a ser desempeñada solo en los sectores en consideración. Este tipo de desempleo llevó de forma irremediable al lamentable aumento de la delincuencia, al fortalecimiento de los grupos alzados en armas y en general a la preocupante descomposición social que de manera desafortunada es hoy por hoy la principal carta de presentación en el campo internacional.

Paralelamente aumentó el contrabando a través de la modalidad del lavado de dólares (para el asombro de quienes considerábamos que el desplome del mismo sería irreversible con la apertura al comercio exterior), el nivel del narcotráfico se ha mantenido y hay quienes manifiestan que pudo haber aumentado no obstante el desmantelamiento de los principales carteles de la droga en el país, la economía subterránea aún no cede terreno y, para rematar, la delincuencia urbana continua ganando espacio a pesar de los esfuerzos estatales por el fortalecimiento de la fuerza pública.

Este desorden social se ve agravado tanto por el aumento de la pobreza como por el desmesurado crecimiento en la concentración del ingreso en unas pocas manos que son insensibles con lo que ocurre en su alrededor. Desde esta perspectiva no se puede afirmar entonces, que el efecto negativo de la apertura ha afectado a todos por igual; al contrario, hay quienes se han beneficiado de manera formidable con el nuevo modelo de desarrollo a tal punto que la defensa que realizan del mismo la han hecho contra viento y marea a sabiendas de la contribución a la desigualdad social que lo caracteriza.

Pareciera entonces, que el apego irrestricto a las formulas y modelos econométricos que se viene magnificando sobre todo desde mediados de los años setenta, se constituyera en la vara mágica para los ultra Neoliberales que buscan crecimiento económico con estabilidad relativa en el nivel de precios, colocando al margen el bienestar y el avance social de las inmensas mayorías marginadas y cada vez más empobrecidas del pueblo colombiano.

En esta dirección, se podría aseverar que se está intercambiando estabilidad macroeconómica por desorden social, todo por saciar el ansia voraz de las instituciones de financiamiento multilateral y de las demás compañías financieras internacionales de obtener un retorno de recursos inmensamente superior a los que se han otorgado en calidad de prestamos a los países en desarrollo a través de los onerosos empréstitos internacionales.

Ahora, si incorporamos en el análisis el fenómeno de la instantaneidad de la globalización de la economía mundial del que Colombia no escapa, el panorama pareciera oscurecerse aún más, pues dicho evento se encuentra magnificando la transición que vive la economía nacional, al igual que la de la mayoría de los países en desarrollo, desde una instancia en la que la sociedad fue de carácter industrial y agrícola a otra en la que predomina la terciarización de las economías.

En efecto, el aumento de la participación relativa de los sectores de servicios dentro de la producción y el consecuente descenso de sectores tales como la industria manufacturera, el sector agropecuario y el mismo sector de la construcción, que todavía no reacciona del

letargo que lo ha caracterizado durante los últimos años, se constituye en prueba fehaciente no solo de que hay quienes obtienen amplios beneficios con el modelo de desarrollo basado en la libertad de los mercados, por ejemplo el sistema financiero en el caso colombiano, sino también de la constante tendencia al crecimiento de la brecha existente entre los niveles de ingreso de la población.

En ese orden de ideas, como lo señala Parra Peña (1996), **ante los adelantos en materia tecnológica, las actividades dependientes del suministro de materias primas van disminuyendo su peso relativo dentro del contexto del desarrollo global de la economía mundial, presentándose una profunda revolución en la transformación de insumos y materias primas, el transporte, la disponibilidad y la utilización de datos y, de esta manera en la ampliación de las transacciones financieras, todo lo anterior sin relación directa con los cambios en las formas de producción material.** Para manifestarlo de otra forma, las aparentes ventajas comparativas (amplia disponibilidad de recursos naturales, insumos, materias primas y mano de obra barata) que se constituían en la base del comercio internacional de los países en desarrollo también se desvanecen, tanto por la menor demanda de insumos utilizados en la producción de los diferentes bienes como por el escaso valor que se les puede adicionar.

La anterior situación permite argumentar que el deterioro de la equidad no solo se reduce a los agentes económicos particulares como las familias, sino que también ha venido involucrando a las empresas; en tal sentido, plano microeconómico, los procesos de ajuste, de estabilización macroeconómica y de reformas de corte estructural han actuado como un poderoso mecanismo de selección, que ha obligado a las diferentes empresas a acomodarse a las nuevas circunstancias ahora determinadas casi exclusivamente por las fuerzas del mercado y a las nuevas modalidades de regulación de las actividades productivas.

Por supuesto la reacción de las empresas se ha diferenciado notoriamente: la respuesta a estos movimientos ha estado circunscrita a factores tales como el sector al que pertenece, la región donde desempeña su actividad productiva y la disponibilidad de capital para poder emprender procesos de reconversión que les permita competir ante sus pares internacionales con posibilidades de éxito.

En efecto, así como la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a los sectores industrial y agropecuario han tenido un impacto negativo frente al proceso en consideración, también es válido señalar que las grandes empresas de estos sectores, del sector de servicios y aquellas que se han adherido o han sido absorbidas por los grandes monopolios nacionales o internacionales, han logrado adaptarse a las cambiantes circunstancias con resultados mucho más satisfactorios.

CONSIDERACIONES FINALES

Sintetizando es válido argumentar que la crisis de la deuda externa que estalló en agosto de 1982 en México se constituyó en el punto de inicio del desmonte del modelo sustitutivo de importaciones en la mayoría de los países latinoamericanos. En tal sentido, en Colombia las estrategias de política económica que significaban un viraje al citado modelo de desarrollo

ya se habían iniciado con anterioridad, así no se hubiera mencionada de manera expresa la adopción de un nuevo derrotero para el desarrollo económico y social del país.

El decreto 444 de 1967 cuyo objetivo fue el de diversificar la base exportadora para intentar obviar la excesiva dependencia del sector cafetero como única fuente generadora de divisas, fue el estandarte que pretendió darle otro aire al citado modelo cepalino. Ya en 1990, luego de iniciare el proceso de ajuste económico en 1986 “sugerido” por el Fondo Monetario Internacional, se declaró y se inició el modelo de internacionalización y modernización de la economía nacional a través del esquema de la apertura económica con los resultados antes comentados.

Como se podrá concluir de acuerdo con lo planteado hasta el momento, ni el modelo sustitutivo de la CEPAL ni el modelo Neoliberal que se inició con la crisis financiera de México como alternativa para enfrentarla, han sido formulas convenientes para resolver los problemas seculares que han aquejado tanto a los países de la región como al nuestro en particular. Desde luego que en alguna medida ellos han rendido sus frutos y que, por lo tanto, no se pueden descalificar de manera radical, siendo entonces pertinente retomar o continuar con las estrategias de política que hayan ofrecido los resultados positivos de ellas esperados.

En el caso por ejemplo del modelo sustitutivo se pueden destacar como tres de sus logros más importantes, el posibilitar el inicio de la consolidación de la industrialización del país, la consecución de tasas de crecimiento económico promedio del 4.6% aproximadamente y la reducción de la población que vivió por debajo de la línea de la pobreza absoluta, aunque se empezó a notar una creciente tendencia hacia la concentración del ingreso y de los recursos productivos en manos de los propietarios de los procesos productivos de los sectores de rápida industrialización. Por su parte no se puede negar que el principal aporte del Neoliberalismo ha sido la reducción drástica de la inflación latinoamericana en general y, a nivel particular, en nuestro país aunque de manera no tan satisfactoria.

De igual manera el nuevo modelo de desarrollo ha posibilitado la supervivencia de aquellas empresas que han alcanzado un alto grado de eficiencia a tal punto que no solo han logrado consolidarse en el mercado interno sino que también se han convertido en plataforma de un crecimiento orientado hacia el mercado exterior con el consecuente resultado positivo tanto para el consumidor nacional, que ha tenido la posibilidad de poder satisfacer sus necesidades a menores precios y con productos de mejor calidad, como para la economía en general a través de la posibilidad de generar sus divisas de manera sostenida en el tiempo para su desarrollo económico y social.

Lo lamentable del asunto es el hecho de que las pequeñas y medianas empresas que han resistido el embate de la poderosa y absorbente competencia externa han sido muy pocas, siendo más notorio este fenómeno en los ya mencionados casos de las empresas de los sectores agropecuario y de la industria manufacturera en los que la labor desempeñada por los trabajadores es sumamente especializada.

En tal sentido el grueso de los nuevos desocupados que se suman a la creciente población económicamente activa, que no pueden ser ocupados en los nuevos sectores dinámicos de

la economía altamente intensivos en capital y tecnología, contribuye al robustecimiento de la preocupante tasa de desempleo nacional que se está constituyendo en una bomba de tiempo para el Colombia y para la mayoría de los países del mundo contemporáneo que ven como cada día crecen sus tasas de desempleados. Aunque no cabría la expresión popular, mal de muchos consuelo de tontos, es preciso anotar que el problema del desempleo es hoy de orden mundial, al punto de que varias de las potencias europeas andan bastante preocupadas con el referenciado flagelo que hoy agobia a la humanidad en general y a los citados países en particular.

Es tal el consenso que gira en torno a lo perjudicial de la adopción fanática de un determinado modelo de desarrollo, que la posición reciente del otrora ministro de hacienda en el país Rudolf Hommes acerca del modelo de desarrollo aperturista ha dejado de ser extremadamente radical y así lo deja entrever cuando manifiesta que, después de diez años de haber sido adoptado el modelo de apertura económica en el continente, se pueden vislumbrar algunos graves problemas tales como la carencia de recetas para solucionar los problemas de inequidad en la distribución del ingreso o acceso a los servicios básicos.

De igual manera Hommes (1998) manifiesta que el modelo no sirve para aliviar la extrema pobreza en el continente a menos que haya una decidida intervención del Estado para focalizar la dotación de servicios básicos a los grupos poblacionales más vulnerables. En tal dirección plantea, a propósito de las próximas elecciones presidenciales en Colombia, que el candidato que aún no ha aparecido es el que se comprometa a eliminar la pobreza extrema sin clientelismo ni politiquería y a un crecimiento sostenido de la economía en el largo plazo, dejando a un lado las ideologías que incitan a la adopción de modelos de desarrollo económico y social ineficaces y que abrace una filosofía de progreso material, de justicia social, de paz y de bienestar.

Por su parte Urrutia (1998), aunque confiesa sus preferencias por la ortodoxia clásica, manifiesta que los indicadores de deuda pública en Colombia todavía son buenos pues representan el 17% como proporción del PIB contra aproximadamente el 125% en Bélgica, 60% en Alemania y 65% en España. Lo anterior lleva, según el gerente del emisor colombiano, a que en el futuro cercano no se vislumbren dificultades de financiamiento externo para el gobierno, aunque si es de extrema urgencia el controlar el crecimiento del déficit fiscal para frenar los incrementos en el déficit en cuenta corriente que podrían asustar a los prestamistas de orden internacional.

Como se desprende de las dos posiciones anteriores, la radicalidad en cuanto a las posturas en materia de políticas económicas características de un determinado modelo de desarrollo, pierden vigencia sobre todo cuando se comprueba que esas estrategias no han ofrecido los resultados de ellas esperados y aferrarse al paradigma por no traicionar la ideología que lo caracteriza puede dar al traste con las intenciones de mejorar las condiciones de vida de una sociedad así se beneficie solo un gremio, región, grupo de personas o, sencillamente, los seguidores de un determinado partido político.

Para finalizar es preciso señalar que puntos de vista como los que hoy maneja el exministro Hommes o son los que se necesitan para, de una vez por todas, emprender las acciones que conduzcan hacia un crecimiento sostenido que propicie las condiciones necesarias para

poder alcanzar mejores escenarios de vida. Es necesario entonces crear, magnificar o simplemente continuar con aquellas políticas que de una u otra forma han ofrecido resultados positivos en pro del desarrollo económico del país no importando el tinte ideológico o político que las identifique. En tal dirección la reflexión debe girar entorno a la necesidad de que la combinación sector público sector privado adopte las estrategias que a cada uno corresponda, desprendiéndose de los intereses mezquinos peculiares de determinadas tendencias políticas.

Desde la anterior perspectiva también es digno destacar el consenso al que se llegó, como resultado de un trabajo conjunto entre Fedesarrollo y el Departamento Nacional de Planeación, en el sentido de que Colombia es un país en el que la brecha existente entre los ricos y pobres es cada vez mayor y que la razón del nefasto insuceso, son las reformas estructurales y la liberación comercial, hecho que deja entrever la tendencia a reconocer tanto las bondades como las fallas de algunos modelos y/o estrategias económicas. El estudio titulado “El desempeño de la macroeconomía y la desigualdad en Colombia: 1976-1996” que fue presentado en el seminario sobre la inflación organizado por el Banco de la República, revela cifras bastante preocupantes para soportar su apreciación. Los expertos concluyen que en 1996 el 20% de la población más rica del país recibía el 54% de los ingresos totales, mientras que el 20% de los más pobres apenas tuvo acceso al 6% de los ingresos laborales².

En resumen es posible pensar en la mezcla de acciones que conduzcan a la consecución y mantenimiento de la estabilidad macroeconómica con cierta modalidad de intervención estatal que permita optar, a la par con la mencionada estabilidad, por una mayor equidad en la distribución de los beneficios del crecimiento. Por supuesto, primero es necesario generar el crecimiento económico, ante lo cual las políticas no podrán ser excesivamente contraccionistas, como de hecho se han implementado en los últimos años en el país y en el resto de la región latinoamericana para combatir la inflación; **si los problema de mayor apremio son los del deprimente ritmo de crecimiento, la creciente tasa de desempleo y consecuentemente el deterioro en los niveles de pobreza y en la distribución del ingreso, es necesario enfrentarlos con los antidotos que realmente impliquen su control y, en tal caso, las estrategias de política económica a seguir tendrán que ser de mayor laxitud, aunque su costo sea el de reversar la tendencia descendente de la inflación característica en el país desde inicios de la presente década.**

Es de esperarse entonces, que los responsables de la formulación y ejecución de las políticas, se esfuercen por obtener avances simultáneos en los diversos frentes económicos y sociales en lugar de centrarse exclusivamente en uno solo sacrificando los demás, como viene aconteciendo últimamente en el país reflejándose esta última situación, en los catastróficos resultados por todos conocidos en materia de crecimiento, desempleo, pobreza y distribución del ingreso.

También es digno de considerar por parte de los defensores de la ortodoxia Neoliberal, así sean desconfiados por principios, que existen campos en los que es necesaria la acción estatal (desprendida ésta de la cultura corrupta que la ha caracterizado y amparada en

² Citado en el semanario Portafolio, lunes mayo 4/98, p. 8.

elevados índices de eficiencia, transparencia y responsabilidad) dado que los mercados por sí solos no han garantizado ser los mejores distribuidores de los recursos ni de los beneficios del crecimiento económico.

BIBLIOGRAFÍA.

GARCÍA, Jorge. Growth, Stabilization, and adjustment in Colombia: some lessons from the period 1966–1990. Documento presentado en el seminario Latinoamericano sobre crecimiento Económico, Santafé de Bogotá, junio 27 y 28 de 1994.

GREEN Duncan. La Revolución Silenciosa: El auge de la economía de mercado en América Latina. Tercer Mundo Editores, 1997.

GUZMAN Mora, Fernando. El problema de la apertura económica Neoliberal. La República, agosto 30 de 1997.

HOMMES, Rudolf. ¿Opciones?. El Colombiano, abril 19 de 1998.

ISRAEL ARTURO. La función cambiante del Estado en el proceso de desarrollo. Revista Finanzas y Desarrollo, junio de 1991.

MONTENEGRO, Armando. Situación de la Economía Nacional. Documento presentado en el seminario ANIF – FEDESARROLLO, Abril 30 de 1997.

_____. Condiciones de sostenibilidad de la estrategia actual: ¿Es el modelo actual suficiente para promover un crecimiento acelerado en Colombia?. Documento presentado en el seminario Latinoamericano sobre crecimiento Económico, Santafé de Bogotá, junio 27 y 28 de 1994.

PARRA Peña Isidro. Del Neoliberalismo a la posmodernidad. Academia colombiana de ciencias económicas, 1996.

PORTAFOLIO. Desigualdad a todos los niveles: los pobres solo tienen el 6% del ingreso laboral. Portafolio, mayo 4 de 1998.

ROSENTHAL, Gert. La evolución de las ideas y las políticas para el desarrollo. Revista CEPAL No.60, Diciembre de 1996.

SUMMA. ¿La libertad económica implica prosperidad? Informe especial Revista Summa No.96, marzo de 1996.

URRUTIA, Miguel. “Prefiero ser bien ortodoxo”. Revista Dinero, marzo 4 de 1998.

AUTORES: HUMBERTO FRANCO GONZÁLEZ Y ALFONSO GÓMEZ CIFUENTES,
Profesores Departamento de Economía Universidad EAFIT, Medellín. Mayo 7 de 1998.